

Por los caminos de la cuarta transformación

Luis Hernández Navarro*

La oposición política al nuevo gobierno no vendrá, en lo esencial, de los partidos políticos. No por lo pronto. No tienen ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados ni la fuerza ni la consistencia para hacerlo. PRI y PAN están fracturados. Ya lo estaban antes de los pasados comicios, pero ahora su fractura es mayor. La pelea por ver quiénes se quedan con ellos es a muerte.

Del Camino Real al quién manda

La fotografía es elocuente. Fue tomada tan sólo tres días después del triunfo “claro, contundente e inobjetable” de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y apenas el día posterior a su reunión en Palacio Nacional con el presidente Enrique Peña Nieto. En ella, efusivo, Claudio X. González abraza a Andrés Manuel López Obrador, hasta poco tiempo antes su acérrimo enemigo. Su mano derecha está a punto de palmear la espalda del futuro presidente. En su cara se dibuja una enorme sonrisa.

Ese “abrazo del Camino Real” pareció sellar un pacto entre el poderoso Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el candidato triunfante en la elección presidencial.

* Coordinador de opinión de *La Jornada*.

Varios periódicos nacionales que llevaron en su primera plana esta foto o alguna otra parecida resumieron el sentido de la “luna de miel” entre los señores del dinero y el futuro mandatario: “Confianza y certidumbre”, el signo de la nueva relación, publicaron. “Reconciliación”, dijeron otros.

El mensaje de la imagen fue claro: el pleito entre ambos había quedado atrás. A partir de ahora, los empresarios dejarán de llamar al tabasqueño López y se referirán a él como don Andrés Manuel López Obrador. Y el para ese momento ya casi Presidente electo dejará de calificarlos de rapaces y dirá que son responsables.

Los mercados respiraron tranquilos con la foto. Las profecías de un inminente apocalipsis financiero inmediatamente después del triunfo del tres veces candidato no se cumplieron. En la reunión del Camino Real, el candidato ganador se comprometió a mantener la estabilidad macroeco-

nómica. Igual lo hizo en el primer discurso que dio, inmediatamente después de que los candidatos derrotados y el presidente Peña Nieto le reconocieron su triunfo. En la lista de sus compromisos, no hay ambigüedad alguna: disciplina financiera, autonomía del Banco de México, no afectar la propiedad, bajar el coeficiente de deuda pública al PIB y revisar contratos bajo la norma de las leyes.

En el evento con el CCE, los empresarios respaldaron el plan de becas de trabajo de AMLO. El programa, que tendrá un costo de 100 mil millones de pesos, consiste en contratar a unos de 2.3 millones de muchachos en empresas, talleres y comercios como aprendices, a cargo de tutores y con un sueldo financiado por el gobierno, proveniente de recursos obtenidos de recortar gasto superfluo.

El empresario Alfonso Romo, coordinador del Proyecto de Nación de AMLO y jefe de la Oficina de Presi-

dencia, cerró la pinza de la operación para acercar el mundo patronal al próximo Jefe del Ejecutivo. En entrevista con la revista *Forbes*, dijo que México está llamado a ser un paraíso para la inversión privada. Añadió que las Zonas Económicas Especiales (ZEE) deberán extenderse en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, sin “dejar nada fuera”.

Poco antes, en un aviso para navegantes, fue el mismo Romo quien, desde el proyecto Vaquerías a finales del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, forjó parte de su fortuna al amparo de su relación con los presidentes en turno, confesó a Martha Anaya: “La idea y la instrucción personal de AMLO es crear confianza y no parar el país; recibir y echar a andar el plan que traemos, pero sin perder la inercia”. Y, para que no hubiera dudas del rumbo a seguir, añadió: “El país nos está dando un mandato de centro. Es un Plan de Gobierno de centro que toma en cuenta a los olvidados”.

Los empresarios recibieron bien los mensajes. En un video, integrantes del influyente Consejo Mexicano de Negocios (CMN), hasta poco antes hostiles a López Obrador, cuyos rostros son conocidos básicamente por aparecer en publicaciones de “sociales” que dan cuenta de sus celebraciones y funciones filantrópicas, reconocieron el triunfo del fundador de Morena y reiteraron que no dejarán de invertir en México. “Todos queremos que al nuevo gobierno le vaya bien, porque queremos que a México le vaya bien”, dijo Antonio Fernández Carbajal, del grupo Femsa.

Los mercados lo acogieron aún mejor. Durante los días posteriores a los comicios, el peso registró su mejor semana en casi siete años: una ganancia de más de 4%. Y el mercado global accionario fue el segundo con mejor desempeño —medido en dólares— a nivel global, con revalorización de acciones.

Sin embargo, semanas después, a finales de octubre, la imagen será distinta. La cámara capta de arriba abajo a Andrés Manuel López Obrador, ya para ese momento presidente electo. Él está sentado, vestido con traje gris, camisa blanca y corbata a rayas azules y rojas. A su espalda, hay una pequeña escultura del ex mandatario Benito Juárez, una foto de Lázaro Cárdenas, el recuperador de la soberanía energética nacional, y una bandera mexicana que tiene como escudo un águila republicana, utilizada por el mismo Juárez hace más de siglo y medio.

A su costado, hay una pequeña pila de libros. Hasta arriba de ella se encuentra *¿Quién manda aquí? La crisis global de la democracia representativa*, de Felipe González, Gerson Damiani y José Fernández Albertos. Abajo de éste hay

uno sobre *Regeneración*, la prensa magonista que anticipó y preparó la Revolución mexicana de 1917.

La estampa, llena de simbolismo, es parte de un video que López Obrador grabó como respuesta a las presiones económicas que algunos grupos empresariales orquestaron a raíz de su decisión de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, una megaobra multimillonaria.

En el video, el presidente electo pide a los ciudadanos mantener la calma, y denuncia que estos grupos patronales, al amparo de la corrupción, pretendían realizar grandes negocios indebidos en el terreno que actualmente ocupa el aeropuerto en funciones. Y, para que no les quede duda de que el mensaje central del comunicado es quién va a mandar, dice: “No estoy de florero. No estoy de adorno. Traigo un mandato de los mexicanos. Quieren los mexicanos que se acabe la corrupción y la impunidad”.

Mantener o no la construcción de un nuevo aeropuerto en Texcoco o trasladarla a Santa Lucía, donde ya opera una base aérea militar, se convirtió, a finales de octubre, en la disputa más importante que sostuvo AMLO con la cúpula empresarial, en el largo interregno que va, desde su triunfo electoral en julio de 2018 a su toma de posesión el 1° de diciembre.

La decisión de cancelar la obra fue finalmente justificada realizando una consulta ciudadana informal en la que participaron poco más de un millón de ciudadanos, y en la que sufragaron por la suspensión casi las tres cuartas partes de los votantes.

Los empresarios, por medio del CCE, respondieron diciendo que “la cancelación del NAIM tendrá implicaciones jurídicas y financieras con acreedores y contratistas, pero especialmente riesgos reputacionales en perjuicio de México y futuros proyectos de inversión”.

Con el video y una conferencia de prensa en la que anuncia la decisión de abortar la obra, el entonces futuro mandatario quiso dejar perfectamente claro que lo que estaba en el fondo de esa disputa era la cuestión del poder. Frente a los periodistas, preguntó: “¿Quién manda? ¿No es el pueblo? ¿No es esa la democracia?”. Y respondió: “Ese es el cambio. Se acabó el predominio de una minoría y la vinculación del poder económico y político, que el gobierno esté secuestrado al servicio de un grupo. Imagínense al Estado mexicano, democrático, de derecho al que aspiramos, supeditado a mercados financieros”.

La reacción inicial de los mercados fue inequívoca. El mercado accionario retrocedió, el índice de bolsa cayó y

el peso perdió valor frente al dólar. Las calificadoras amagaron con evaluar severamente el riesgo país. En diez días, inversionistas extranjeros sacaron de México el equivalente a unos 1900 millones de euros.

Sin embargo, en palabras de López Obrador, la tormenta fue llovizna. Después de una reunión con los principales contratistas que participaban en el proyecto aeropuerto de Texcoco, los indicadores económicos se recuperaron significativamente. Los constructores recibieron garantías de que las cláusulas de terminación anticipada de contrato van a aplicarse, y de que se les va a finiquitar en función de los montos que les adeuden. A cambio, ellos aceptaron no llevar los casos a tribunales.

Pero la llovizna no menguó. Apenas dos días después de su investidura formal como Jefe del Ejecutivo, el asunto del NAIM siguió provocando inundaciones. Subsiste el problema de cómo pagará el futuro gobierno a los inversionistas del proyecto los bonos por más de 6 mil millones de dólares que se colocaron en los mercados financieros.

Sin embargo, el asunto del quién manda no quedó allí. El triunfo inicial de la separación del poder político del económico duró poco tiempo. Ricardo Monreal, coordinador en el Senado del partido gobernante Morena, presentó una iniciativa para reformar las leyes que regulan el funcionamiento de los bancos, con el fin de eliminar muchas de las comisiones que estas instituciones cobran a sus usuarios por distintos servicios.

La medida no había sido debatida durante la campaña electoral y fue tomada de manera sorpresiva, sin consulta con las instituciones financieras privadas, el Banco de México o la Comisión Nacional Bancaria. La Bolsa de Valores se desplomó casi 6% y el dólar se fue arriba de los 20 pesos.

La iniciativa es popular. Las comisiones bancarias en México son excesivas. Los bancos las justifican en nombre de la poca bancarización de la economía. En los hechos, sirven para aportar importantes ganancias a las matrices españolas, inglesas o estadounidenses. Su reducción es una demanda de importantes sectores sociales.

Sin embargo, ante el nerviosismo, el senador Monreal tuvo que recular y decir que la propuesta no se avalaría hasta escuchar a los banqueros. Carlos Urzúa, el secretario de Hacienda de López Obrador, se desmarcó de la propuesta y declaró que había que ser muy cuidadosos en este terreno. La dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, cuestionó la iniciativa. Y, como la tormenta bursátil no cesaba, López Obrador tuvo que declarar que respetaba la iniciativa, pero que en los primeros tres años, su gobierno

no pensaba modificar el marco legal con relación al sector financiero y fiscal.

De esta manera, AMLO tuvo que enfrentar un problema generado desde sus propias filas donde no lo había. De paso, en no pocos sectores de la población quedó la sensación de que el futuro gobierno trabaja de manera descoordinada, y de que los bancos se salieron con la suya, así sea temporalmente.

De eso que llaman la cuarta transformación

Es el sello de la casa. De manera recurrente, AMLO ha dicho que se propone encabezar la cuarta transformación en la historia de México. No es una propuesta más, sino uno de los ejes centrales de su proyecto. Se trata, ni más ni menos, de refundar el Estado mexicano.

Al comenzar 2018, en Izamal, Yucatán, todavía como precandidato a la Presidencia, anunció: “Nuestra lucha tiene como antecedentes las tres grandes transformaciones que ha registrado la historia de nuestro país: la Independencia, la Reforma y la Revolución convocada en 1910. Ahora, de manera pacífica buscamos, entre todos y desde abajo, llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México”.

López Obrador sabe de lo que habla. Ha estudiado, investigado y escrito sobre historia de México. Su visión de la política está anclada en una reflexión genuina y original sobre lo sucedido en el país.

Sin embargo, a pesar de ello, el candidato no ha precisado ni detallado su iniciativa de cuarta transformación. La ha ido desgranando a lo largo de la campaña en mitines y debates, o en declaraciones como presidente electo o en su toma de posición, enunciando en lo general algunos de sus rasgos. Se trata —ha dicho— de un cambio profundo, pacífico y radical, que arrancará de raíz el régimen corrupto, de injusticia y privilegios; de una metamorfosis del cuerpo político en el que la soberanía volverá a radicar en el pueblo.

Como ha explicado Enrique Semo, las revoluciones de Independencia, Reforma y Revolución tuvieron objetivos precisos asociados a la conformación del capitalismo y la nación. Pero ahora, a diferencia de ellas, no se ha explicado cuál es el punto de llegada de esta cuarta transformación ni sus fuerzas motrices y dirigentes ni su programa.

Las revoluciones de Independencia, Reforma y Revolución parieron nuevas constituciones. López Obrador ha rechazado convocar a una nueva constituyente. Más aún,

ha anunciado que no promoverá cambios en la Carta Magna durante los tres primeros años de su gobierno.

¿Cómo se puede refundar una nación y formalizar jurídicamente un nuevo pacto social sin una nueva Constitución? ¿Luchando contra la corrupción? Para el presidente electo, la corrupción es el principal problema del país. Según él, la desigualdad se relaciona no con la explotación del patrón al obrero, sino con la corrupción de la “mafia” que gobierna. Desde su punto de vista, quienes hablan de explotación están equivocados porque “en México, esas leyes no aplican”.

En su toma de posesión, dijo: “Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentísimo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y de la violencia que padecemos”.

Desde su lógica, el combate a la corrupción y a la impunidad permitirá liberar recursos suficientes para impulsar el desarrollo de México. Combinando —explicó— la lucha contra la corrupción y la austeridad republicana, se hace innecesario aumentar impuestos e incrementar los precios de los combustibles más allá de la inflación.

Obviamente, es muy importante moralizar la vida pública del país. Pero, aunque la lucha contra la corrupción sea condición necesaria para inaugurar una nueva etapa en la vida pública del país, no es suficiente para hacerlo.

En nuestro país —explica Enrique Semo—, la era de las revoluciones burguesas se clausuró en 1940. Ningún gran movimiento social transformador puede tener como signo el desarrollo del capitalismo o la constitución de la nación. Esto quiere decir que una cuarta transformación como la que López Obrador anuncia requeriría de una ruptura con el actual modelo de desarrollo. Pero no hay señales de que algo así vaya a suceder. Más allá de la fuerte crítica al modelo neoliberal que hizo en su toma de posesión, algunos de los rasgos centrales del Consenso de Washington se mantienen: autonomía del Banco de México, control de las variables macroeconómicas, libre comercio, no intervención del Estado en actividades productivas (excepto las energéticas).

En distintos momentos, López Obrador ha planteado que se propone dismantlar el poder de la oligarquía para establecer el poder de la República; separar el poder público del privado, el poder económico del poder político.

Una concepción de esta naturaleza supone una visión bonapartista de la política: elevarse por encima de las clases

sociales para gobernar al margen de ellas. Sin embargo, la República no existe al margen de las clases sociales.

En los hechos, más que ubicarse por arriba del poder económico, el nuevo presidente pareciera estar echando a caminar un recambio de las élites empresariales y sus representaciones. Lo que las dos imágenes muestran es cómo el Jefe del Ejecutivo está definiendo su margen de autonomía con el poder económico hegemónico, favoreciendo a nuevos grupos empresariales con grandes obras, luchando contra la corrupción e impulsando megaproyectos y reformas similares a las que gobiernos del PRI y el PAN quisieron infructuosamente realizar.

Una figura relevante en este reacomodo es Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo de López Obrador. Su cercanía con Carlos Slim es pública. Él se ha encargado de acercar a un buen número de empresarios al nuevo Jefe del Ejecutivo.

En esta dirección, se inscribe la designación de un consejo asesor empresarial en el que participan, de manera destacada, los dueños de las tres televisoras del país, Jorge Hank, delfín financiero del Grupo Atlacomulco, y hombres de empresa cercanos a Alfonso Romo. No son pocos analistas que ven en este grupo un rival del CCE.

También el choque de posiciones sobre el gobierno dentro de los señores del dinero. Mientras el representante de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, declaró que el discurso de AMLO en su toma de posesión había sido muy retrógrado, Carlos Slim aseguró que hay coincidencia en lo esencial con el presidente.

A comienzos de 2019, deberá elegirse una nueva dirigencia del CCE. Quien más se menciona para quedar al frente del organismo es Carlos Salazar, ex director de Femsa. También busca esa posición Bosco de la Vega, parte del Consejo Nacional Agropecuario. Ambos tienen cercanía con Claudio X. González, que es quien manda allí.

También en 2019 se renovará la directiva de la Asociación de Bancos. El actual presidente, Marcos Martínez, de Santander, no es bien visto por los dos grandes bancos, Bancomer y CitiBanamex, que lo ven tibio frente a López Obrador. Lo critican por no haber sido más firme frente al gobierno o en temas como el de las comisiones. El asunto es que Ana Botín, la *mera mera* de Santander, está muy relacionada con Miguel Ángel Revilla, presidente de la comunidad autónoma de Cantabria (donde los Botín mandan) y amigo del nuevo presidente. Por lo pronto, para encabezar la asociación se anda moviendo Luis Niño de Rivera, de Banco Azteca, es decir, de Ricardo Salinas Pliego.

La constitución moral

El 26 de noviembre, el todavía presidente electo les explicó a los integrantes de su futuro gabinete: “Me sentía insatisfecho... Sentía que nuestro proyecto estaba cojo, mirando sólo al bienestar material. Faltaba esto: fortalecer los valores para llevar a cabo la cuarta transformación”.

Y añadió: “Hay quienes piensan que tiene que ver con lo religioso, con lo personal, que es una invasión a nuestra intimidad..., pero es muy importante la moral. La política es un imperativo ético y se tiene que pensar en el fortalecimiento de valores”.

Para resolver esa carencia, Andrés Manuel López Obrador plantea redactar una constitución moral. Para ello formó un grupo de cuatro personas, encargado de coordinar el trabajo para recoger ideas, opiniones y sentimientos para su elaboración.

La propuesta fue presentada originalmente durante la campaña electoral, en un acto con el Partido Encuentro Social. En la constitución moral —dijo el entonces candidato—, deben incluirse principios y derechos de nuestro tiempo, conseguidos o por conseguir, como la no discriminación, la diversidad, el respeto a la diversidad, la pluralidad, el derecho a la libre manifestación de las ideas. Estos fundamentos deben tomarse en cuenta para poder hacer realidad una república amorosa.

Es comprensible que el futuro gobierno quiera moralizar la administración pública. La administración de Enrique Peña Nieto estuvo marcada por sonados escándalos de corrupción y frivolidad que ofendieron e indignaron a amplios sectores de la población. El triunfo electoral de López Obrador caminó de la mano de su imagen de político honesto capaz de poner fin a esta falta de decoro.

Las iniciativas de moralización no fueron inusuales en gobiernos anteriores. Ante las desvergüenzas y las corruptelas del periodo alemanista (1946-1952), el presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), en uno de los clásicos movimientos pendulares que caracterizan la política, propuso que los funcionarios y los empleados públicos procedan con la más absoluta honradez y así lograr la moral administrativa y pública de México. Para aterrizarlo, formó Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material.

Algo similar sucedió años después con la descomposición y la suntuosidad de la administración de José López Portillo (1976-1982). Su sucesor, el neoliberal Miguel de la Madrid, respondió con una supuesta cruzada contra la corrupción moral y metió a la cárcel al jefe policial Arturo

Durazo. El resultado final de su iniciativa (como la de Ruiz Cortines) fue un absoluto fracaso.

El nuevo presidente y la comisión redactora de la constitución moral han reconocido que su propuesta está inspirada en la *Cartilla moral* de Alfonso Reyes, un texto elaborado por el literato mexicano a petición del entonces secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet. En él se establece que la moral es una constitución no escrita con preceptos de validez universal.

La *Cartilla moral* fue redactada en 1944 en el contexto de la ofensiva del presidente Manuel Ávila Camacho en contra de la educación socialista, finalmente sustituida por la escuela del amor. En los hechos, nunca funcionó. La campaña de alfabetización para la que fue escrita como complemento se echó a caminar sin ella. En la historia de la educación en México es apenas una anécdota. En su voluminosa autobiografía, Torres Bodet apenas le dedica unas cuantas líneas. Esa es la importancia del documento. Que se le quiera revivir ahora es un absurdo.

¿Qué es la constitución moral? Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social del presidente, dijo: “No es una ley que vaya a ser obedecida: se trata de un tratado de ética y de moral que llevara el nombre de Constitución. Consiste en hacer un compendio de valores, ideas que puedan ayudar a la transformación desde la perspectiva de la moral y la ética”, añadió. En otra entrevista, señaló que la iniciativa la definió como un tratado filosófico que buscará replantear los valores sociales para constituir una sociedad incluyente, democrática.

Otro de los integrantes de la comisión para elaborar el documento, el periodista Enrique Galván Ochoa, explicó que “la idea de @lopezobrador es agrupar en un estatuto los valores que ya tenemos, con la participación de la sociedad. No es una legislación coercitiva, es un estatuto que agrupará valores éticos”. Una contradicción porque, según el diccionario de la RAE, un estatuto es la regla que tiene fuerza de ley para el gobierno de un cuerpo.

Llamar constitución a lo que no es una constitución es un absurdo. Es como llamarle perro a un gato. La Constitución —afirma Alfonso Reyes en la *Cartilla moral*— es la ley de todas las demás leyes. Y las leyes están para cumplirse. Son de observancia obligatoria. No existe una legislación que no sea coercitiva. La moral y las leyes son cosas distintas. Como señala Luis Gómez Romero, estamos obligados a acatar el derecho, pero no a ser buenos. En nuestro corazón sólo manda la conciencia.

Es descabellado pretender elaborar desde el Estado un tratado filosófico o un tratado de ética y moral. No

corresponde al Estado hacerlo. Es fundamental que combata la corrupción. Es comprensible que promueva un código de ética para los servidores, que impulse la enseñanza del civismo y el estudio de ética en la educación media superior. Pero es inadmisibles que pretenda establecer lineamientos morales.

Rumbo a lo desconocido

Como se señalaba líneas arriba, Alfonso Romo, el jefe de la Oficina de la Presidencia de AMLO y coordinador de su plan de gobierno, dijo a la periodista Martha Anaya: “El país nos está dando un mandato de centro. Es un plan de gobierno de centro que toma en cuenta a los olvidados. Lo importante es sacar de la pobreza a México”.

Ese plan de gobierno de centro del que habla el empresario puede modificar algunas piezas del actual modelo económico, pero no camina en dirección a la refundación de la República desde la izquierda. Según el mismo Romo, se trata de convertir a México en el paraíso de la inversión privada, y al sureste del país en una gran Zona Económica Especial (ZEE).

Con el nuevo gobierno, no está en juego el cambio del modelo económico; no está a la orden del día el fin del modelo neoliberal en México. No está en puerta la opción de transitar hacia una ruta distinta a la del Consenso de Washington.

No lo está, por dos razones distintas. Primero, porque a pesar de la retórica, López Obrador no postula la necesidad de caminar por una vía posneoliberal. Su programa de gobierno no plantea esa alternativa. Segundo, porque desde 1994-1996 se han aprobado una serie de candados legales que blindan jurídicamente la ruta tecnocrática.

El proyecto alternativo de nación coordinado por Alfonso Romo sostiene que hay que recuperar democráticamente al Estado y convertirlo en el promotor del desarrollo político, económico y social del país. Plantea que se consultará a la gente si las reformas estructurales se mantienen o se cancelan. Anuncia que el presupuesto será realmente público y que se dará preferencia a los pobres. Insiste en la centralidad de la lucha contra la corrupción. Pero no habla explícitamente —como hizo en el pasado— de limar las espinas más filosas del erizo neoliberal.

Sin embargo, aunque no hay ruptura de fondo con el modelo de desarrollo seguido hasta ahora, eso no significa que su proyecto sea mera continuidad del actual. Por supuesto que hay cambios. ¿Dónde están? En la revisión

de los contratos para la obra pública y las concesiones gubernamentales, que son, a decir de Lorenzo Meyer, el corazón de la política. Sobre todo, los de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) y los de las concesiones de explotación de campos petroleros, explotación que difícilmente puede ser catalogado de izquierda.

Una y otra vez, Alfonso Romo ha dado garantías a los inversionistas de que no se afectarán sus intereses. Sin embargo, una parte de éstos chocan frontalmente con los de las comunidades rurales y pueblos indígenas. Así sucede, por ejemplo, con las concesiones mineras o con los proyectos energéticos. También con la anunciada de construir un ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec, con el tren maya o con la intención de fomentar plantaciones forestales. El choque entre estas dos lógicas es inminente y de pronósticos reservados.

La nueva oposición

El vendaval que llevó a López Obrador a la Presidencia desbarató el sistema de partidos tal como había existido hasta ahora. No acabó con la partidocracia (los partidos siguen teniendo el monopolio de la representación política), pero golpeó con fuerza al PRI y al PAN, casi hizo desaparecer al PRD y al PVEM, y borró del mapa a Nueva Alianza.

La oposición política al nuevo gobierno no vendrá, en lo esencial, de los partidos políticos. No por lo pronto. El Senado y la Cámara de Diputados no tienen ni la fuerza ni la consistencia para hacerlo. PRI y PAN están fracturados. Ya lo estaban antes de los pasados comicios, pero ahora su fractura es mayor. La pelea por ver quiénes se quedan con ellos es a muerte.

Por el momento, quien controla el tricolor es Osorio Chong, pero se lo pelean dos grupos: el de Luis Videgaray y Aurelio Nuño (responsable directo de la debacle), y el de Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones. De hecho, la remoción de Zamora en la CNOP fue para que llegara allí el sonorenses. Sin embargo, esto no ha sucedido. Por otro lado, el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, juega la carta de llegar él a la dirección del partido, apostando a convertirse en una pieza clave en la construcción lopez-obradorista de un bloque de poder en el Sureste.

La fractura del PAN es ya un hecho. Felipe Calderón está fuera y apuesta a construir un nuevo partido, replicando la experiencia de Morena. Un sector empresarial parece haber apostado ya de manera clara por fortalecer el liderazgo de Marko Cortés.

Ante el descalabro del PAN y la balcanización y desfondamiento del PRI, la sociedad civil, tutelada y auspiciada por Claudio X. González y socios, que fue planchada por los comicios de julio (la Red de Mexicanos contra la Corrupción), junto a algunos medios de comunicación (con *Reforma* como punta de lanza), aspira a convertirse en el relevo de la nueva oposición de derecha al nuevo gobierno.

La otra oposición está a la izquierda de AMLO. Y está implantada en el mundo indígena y en el zapatismo.

Apenas unos cuantos días después de anunciar la cancelación del NAIM, López Obrador anunció la realización de una nueva consulta sobre el tren maya, la construcción de un canal seco en el Istmo de Tehuantepec, una nueva refinera en el estado de Tabasco y la aplicación de 10 programas sociales.

El tren maya es un servicio de transporte ferroviario que recorrerá la península de Yucatán. Sus estaciones estarán distribuidas en 1 mil 500 kilómetros asemejando la forma de un papalote. Se acompañará de la relocalización de la población y la creación de nuevos centros urbanos. Su objetivo es hacer de la región maya un corredor de desarrollo que, aunque no se reconoce como tal, en los hechos funcione como una Zona Económica Especial (ZEE). Una ZEE es un enclave donde el marco regulatorio en el que deben funcionar las empresas (por ejemplo, el pago de impuestos o el cumplimiento de las obligaciones administrativas) se minimiza en relación con el existente en el resto del país.

El canal transístmico busca promover el desarrollo regional mediante la construcción de un canal seco que conecte el Golfo de México con el océano Pacífico, enlazando los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca. Considera también una zona franca y ser parte de las ZEE. Su realización ha sido un sueño fallido a lo largo de los últimos 51 años.

Tanto el tren maya como el transístmico se construirán en territorios indígenas. El de la península de Yucatán, en una región maya; el de Tehuantepec, en un territorio habitado por 12 pueblos originarios que viven en 539 comunidades: chinantecos, chochocos, chontales, huaves, mazatecos, mixtecos, mixes, zapotecos, nahuatlacos, popolucas y zoques.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado por México, obliga a que en obras de esta naturaleza se organice una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, para que éstas fijen su posición. Esta consulta, diferente a la que AMLO convocó a la ciudadanía, no se ha efectuado. A pesar de

ello, el presidente electo ya anunció que las obras del tren maya comenzarán el 16 de septiembre.

Estos pueblos han resistido ancestralmente a los proyectos de modernización que buscan despojarlos de sus tierras, territorios y recursos naturales de la mano del progreso. Más allá de la voluntad de transformación y de la lucha contra la corrupción, el corredor transístmico y la extensión de las ZEE anuncian el inminente choque de estos proyectos con los pueblos indígenas.

Este conflicto fue anunciado en la Segunda Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno-Ejército Zapatista de Liberación Nacional, llevada a cabo del 11 al 14 de octubre en San Cristóbal de las Casas. Allí se señaló que el próximo gobierno de AMLO, “con sus prácticas viciadas, tiene su mirada puesta en nuestros territorios”, señalaron los participantes.

Los participantes denunciaron que con la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el próximo gobierno dará continuidad a la política neoliberal que daña a los pueblos indígenas del país, y que, además, los 50 mil jóvenes reclutados para las filas de las fuerzas armadas, como propuso AMLO, servirán a la represión y el despojo. “No tenemos más que defender la vida con o sin las mentiras del gobierno que sale, del gobierno que entra, porque las palabras sobran cuando se amenaza a los pueblos”, señalaron.

El conflicto escalará aún más porque el pasado 23 de octubre, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa de reforma que propone la abrogación de la actual Ley Agraria y la expedición de una Ley para el Desarrollo Agrario. Su objetivo central es reforzar los mecanismos para la privatización de las tierras ejidales y comunales (campesinas e indígenas) y la destrucción de la propiedad social. Se trata de otra reforma estructural neoliberal que convalida poner la producción de hidrocarburos, de energía eléctrica y minera por encima de cualquier otra, reforzando el rol de la tierra como mercancía.

Pareciera ser que lo que la administración de López Obrador pretende hacer, en parte, es llevar a buen término varias de las reformas neoliberales que los gobiernos del PRI y del PAN dejaron inconclusas.

¿Un nuevo PRI?

Abierta o soterradamente, sectores muy importantes del PRI apoyaron a López Obrador en todo el país durante su campaña. Obligados a sumarse a un candidato y a un dirigente que no eran de su partido, excluidos de las candi-

daturas, sin recursos económicos para hacer proselitismo y maltratados por el equipo de campaña de José Antonio Meade, multitud de tricolores votaron por Morena. La tecnoburocracia del ITAM los despojó del gobierno, del partido y de los puestos de elección popular. Nunca tuvieron incentivos para que sus siglas triunfaran. Ellos se vengaron sumándose a las filas del amloismo.

El apoyo no fue de gratis. Los compromisos establecidos pueden verse en la composición del Legislativo y en el futuro gabinete. Su cultura política permea sus maniobras políticas. Es particularmente notable la enorme cantidad de figuras relevantes provenientes del zedillismo, una corriente política que tiene su principal astucia, como Baudalaire decía del diablo, en hacernos creer que no existe. El ex presidente, se recordará, tuvo con López Obrador un intenso trato político cuando éste fue dirigente nacional del PRD y responsable de aterrizar los Acuerdos de Barcelona.

López Obrador apuesta a construir un nuevo terreno de relación con los sectores populares a partir de sus programas de becas y ayudas económicas. Decidió hacer a un lado a los gestores tradicionales de estas demandas (a los que juzga de corruptos) y establecer una relación directa con la población, a partir del levantamiento de un padrón de beneficiarios. Se trata del viejo del Pronasol de Carlos Salinas hecho realidad, sólo que ahora sin promover el tejido asociativo que tomó forma en los comités de Solidaridad.

Si esta iniciativa tiene éxito, dejará muy mal paradas a las organizaciones campesinas tradicionales, las asociaciones urbano-populares y al Partido del Trabajo, que construyen sus bases desde la gestión de la demanda popular.

No deja de ser interesante que el principal responsable de estos programas y de la coordinación con los responsables estatales sea Gabriel García Hernández, secretario de Organización de Morena.

Estos padrones de afiliados y el ejército para levantarlos y administrarlos serán, en los hechos, la estructura de un Morena renovado.

Lejos de Dios, cerca de Estados Unidos

A lo largo de la campaña presidencial, diversos enemigos de AMLO lo acusaron de ser el Donald Trump mexicano. No era un halago, sino una forma de golpearlo políticamente. Inopinadamente, semanas después, a través de una misiva, el futuro mandatario mexicano admitió que existen importantes semejanzas entre ambos.

En el último párrafo de la carta que envió al presidente de Estados Unidos, AMLO encuentra paralelismos con él y le dice: “Me anima el hecho de que ambos sabemos cumplir lo que decimos y hemos enfrentado la adversidad con éxito. Conseguimos poner a nuestros votantes y ciudadanos al centro para desplazar al *establishment* o régimen predominante”.

La afirmación sorprende. Trump ha ofendido a México y a los mexicanos. Ha agredido y perseguido a los connacionales que viven en Estados Unidos. Impuso, en plena renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aranceles a exportaciones mexicanas. En lugar de un cambio de paradigma en las relaciones exteriores, el que el próximo presidente mexicano se homologue con el estadounidense es un desacierto.

¿Cuál es la necesidad de encontrar similitudes con él? ¿En qué principio de política exterior se sustenta una maniobra como ésta? ¿Qué gana la diplomacia mexicana equiparando a su virtual presidente electo con uno de los políticos más detestados en el mundo? No se trata de que el tabasqueño ataque al neoyorquino o de que le diga cosas que pongan en peligro el futuro de la relación entre ambos países. Nada de eso, pero sí de mantener una sana distancia. Si en lugar de su firma esas palabras llevaran la de cualquier otro político mexicano, se habría producido un verdadero escándalo.

La carta de AMLO a Donald Trump es mucho más que un mero saludo al vecino del norte, la manifestación del deseo de sostener relaciones binacionales cordiales o una agenda de los asuntos a tratar en común es también un inusual informe unilateral de las medidas que su gobierno tomará para frenar la migración hacia Estados Unidos. “Habrá muchos cambios, señor presidente Trump”, escribe el tabasqueño.

El objetivo explícito de las medidas comunicadas a Trump es que los mexicanos no tengan que migrar por pobreza o violencia, esforzándose en lograr que encuentren trabajo y bienestar en sus lugares de origen. Se busca levantar una serie de cortinas de empleo que frenen el desplazamiento de la fuerza de trabajo hacia Estados Unidos.

Entre las acciones que se echarían a caminar se encuentra la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sureste del país, para crear 400 mil empleos. También, el impulso al corredor económico en el Istmo de Tehuantepec.

Adicionalmente, se recorrerán las aduanas mexicanas hacia el sur, 20 o 30 kilómetros, y se disminuirán a la mitad los impuestos cobrados en la zona fronteriza. Asimismo, se establecerá una franja libre en los 3 mil 185 kilómetros de frontera. “Esta será –dice la carta– la última cortina para retener trabajadores dentro de nuestro territorio”.

La sorprendente actitud hacia Donald Trump tiene su contraparte en el anuncio de que, a partir de ahora, la diplomacia mexicana se guiará por el principio del respeto a la autodeterminación de los pueblos y el no involucramiento en sus asuntos internos. A su toma de posesión, invitó a todos los mandatarios con quienes México tiene relaciones diplomáticas, incluido el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Estas medidas contrastan con la casi absoluta subordinación que la diplomacia mexicana ha tenido en los últimos años a los dictados de Washington.

* * *

Como sucede en los primeros instantes que siguen a un súbito accidente de tráfico en una supercarretera y en el que se impactan muchos automóviles, es difícil saber con

precisión hacia dónde marcha México en estos momentos. Muchos hechos de signo contrario están sucediendo de manera simultánea. Situaciones de signo opuesto chocan unas con otras.

Curiosa ironía, en cada ocasión en la que una élite ha pretendido reformar radicalmente al país desde arriba en contra de los de abajo, el país real terminó cobrándole la factura a los modernizadores y descarrilando sus reformas.

Así sucedió cuando México era todavía la Nueva España, con las reformas borbónicas que terminaron desembocando en la Revolución de Independencia; así pasó con la modernización y la paz social porfirista, descarrilada por la Revolución Mexicana, y así aconteció con la reforma al Artículo 27 constitucional (que metió al mercado las tierras indígenas y campesinas) y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, severamente cuestionados por el levantamiento zapatista del 1° de enero de 1994. Nada asegura que en esta ocasión, con la cuarta transformación y su pretensión de refundar la nación desde las alturas, esto no volverá a suceder.